

[illegible]

EL SIGLO

(EDICIÓN DE 8 PÁGINAS)

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

AL ABRIR LAS SESIONES DE LA HONORABLE ASAMBLEA EN EL TERCER PERÍODO DE LA XVIII LEGISLATURA

Montevideo, Febrero 15 de 1896.

Señores Senadores:

Señores Diputados:

En ocasión idéntica a la presente cumplo la satisfacción de decirles el año próximo pasado que inauguraba nuestro período de sesiones legislativas en plena paz interna y exterior, y que podáis desde luego y sin preocupaciones de este orden, dedicar vuestra atención a los grandes intereses del país; que me animaba la fe profunda de que en el transcurso de nuestras tareas habíamos de encontrar siempre motivos mayores de congratulación y nuevas bases para las más nobles y lisonjeras esperanzas; y por fin que podríais abrigar la más plena confianza en la promesa leal y franca de que ratificaría cada vez con mayor empeño en el tiempo y en los hechos mi propósito de representar un gobierno de paz, de conciliación y de trabajo, y por consiguiente de libertad la más amplia tanto en las manifestaciones de la opinión como en el ejercicio de todos los derechos, y de protección decidida a todas las iniciativas dirigidas al bien de la República.

Exento de toda vanidad jactanciosa y de toda pretensión indebida, entiendo que, si no hemos conseguido realizar en absoluto en todos estos diversos sentidos nuestros anhelos, los hemos realizado en muy buena parte; y que será más de justicia atribuir la deficiencia a causas ajenas a nuestra voluntad o a errores de nuestra parte, que no a falta de sanos deseos y rectas intenciones.

Debemos considerar desde luego la paz interna como un hecho que ya no se discute, y por consiguiente como una conquista definitivamente incorporada a nuestros progresos; de modo que podría estimarse innecesario expresar en esta clase de documentos una afirmación que parecería poner aún en duda su estabilidad. Y el hecho es tanto más elocuente por cuanto la paz de que goza el país es la que entraña el más grande de los beneficios—la paz en la libertad—que es la expresión del más alto concepto de nuestras instituciones democráticas—la más sólida y la más estable, porque tiene en su apoyo las fuerzas más sanas y poderosas de la opinión, de modo que no hay ambición ni interés de partido bastante legítimo para merecerle ni siquiera el más simple estrechecimiento.

Desde luego, no hay partido que pueda con fundamento de verdad decir que no tenga representación en la cosa pública o que por la acción del gobierno esté privado en el ejercicio de sus derechos. Todos los ciudadanos disfrutan de las más amplias garantías al amparo de las instituciones que rigen la República; y bajo mi gobierno no hay un solo oriental que encuentre cerradas las puertas de la patria. Los orientales que viven fuera del territorio obedecen a conveniencias o halagos de interés personal, o a causas de otro orden; y tan inexacto sería calificar de *emigrados políticos* a tantos orientales que viven en suelo argentino, como lo sería atribuir a causas políticas la presencia de tantos argentinos en territorio oriental.

Los tiempos han cambiado mucho sin duda alguna, como ha cambiado el carácter de nuestras disidencias, cuya índole ineluctablemente nos llevaba con frecuencia al ostracismo. Todos pueden vivir respetados y en paz en sus hogares, como puede asegurarse que cada día se acentúa más radicalmente en la conciencia pública el respeto a las instituciones y el acatamiento al principio de la autoridad legal; y debemos confiar cada vez más en esa certidumbre, aunque el apasionamiento de algunos círculos políticos llegue en ciertos momentos de desbordamiento exaltación a predicar en la prensa la anarquía y la revuelta.

Pero aún así, debemos tolerar esos desbordes, originados por extravíos o impacencias generosas muchas veces, aunque dentro de la ley merecieran represión como perniciosos, por cuanto son consecuencias reales del régimen de libertad que ampara a todos y la demostración más sensible de la estabilidad de las instituciones.

A un Gobierno honesto y recto no pueden inspirar ningún recelo tales propagandas, que desnudas de verdad y de espíritu de justicia no alcanzan eco alguno ni pueden perpetuar sus juicios arbitrarios, porque la razón pública y serena del país, que es el juez más imparcial, revoca fácil y rápidamente aquellos fallos.

En otro sentido, el Gobierno libre es por su naturaleza gobierno de discusión, de examen y de crítica, y le corresponde ser tolerante y paciente ante el error y la injusticia extraña, y aún mismo ante la calumnia irracional y cruel, porque eso demuestra su rectitud y probidad, mientras que un proceder contrario podría ser sospechado de exclusión y despotismo.

Debemos, pues, confiar en la paz como en el elemento más precioso de progreso, de bienestar y de felicidad común, como en una aspiración suprema de pueblo constituido y civilizado, que estima y ama la libertad; e invocarla como el testimonio más elocuente a favor de nuestro crédito en el exterior, en donde nuestra importancia se aprecia y se aguilata mucho más que por la bondad de nuestro suelo y la naturaleza de nuestras instituciones, por el período que llevamos recorrido de sólida paz interna.

Tenemos, entonces, que considerar como un deber primordial el mantenimiento de esta paz, deber fácil de llenar, porque consiste simplemente en el respeto fiel y la práctica estricta de las instituciones, observada por gobernantes y gobernados.

Así lo entiendo y así lo cumplo.

Por eso la situación política actual se encuadra, como desde el primer día de mi gobierno, dentro de un espíritu amplio de justicia, de libertad y de concordia, inspirándose en los elevados propósitos y principios que consagra la Constitución, que está por cima de todas las tradiciones de partido, de todas las prevenciones y de todos los odios, para comprender a todos los ciudadanos, sin excepción alguna, dentro de un programa de aspiraciones generales, imponiendo a todos iguales deberes, y asignándoles iguales prerrogativas y derechos.

De este modo y con igual proceder de parte de los partidos, se cierra la puerta a todos los recursos violentos; y entonces las controversias y conflictos de opiniones se resuelven, ya por la elevación de equidad en la práctica del Gobierno, ya también por concesiones recíprocas o acuerdos tranquilos entre los partidos, o se confían al tiempo, que en la organización de nuestras sociedades democráticas es un coadyuvador imprescindible para la realización de las reformas más adelantadas.

De estas situaciones concordantes nace el respeto al Poder Público, el acatamiento a la ley, el celo por las instituciones, las garantías para el ejercicio de todas las prácticas que comprende la vida cívica, el orden y la paz; mientras que las tendencias a la revuelta y la anarquía engendran la violencia, la subversión de todos los principios y de todos los intereses más vitales, no dejando en pos de sí nada duradero y fecundo, a no ser odios y barbarie.

Tal es el sentimiento que domina al país entero, y me es satisfactorio exponerlo aquí, como un justo título de consideración que merecemos ante los demás pueblos civilizados, con quienes mantenemos el comercio de tan diversos intereses y de cuyos capitales y brazos necesitamos para explotar nuestras riquezas y labrar la prosperidad nacional.

Es notoria la insistencia con que se ha dirigido a mi Gobierno el cargo de no haberse ocupado todo lo necesario de lo que se llama tradicionalmente la política, y de haber dedicado toda su atención a los asuntos administrativos.

No temo declarar que considero este cargo como el mejor elogio de mis procedimientos de gobierno.

De este cargo, sin embargo, se han apoderado algunos elementos de oposición para fulminar anatemas contra el Presidente de la República, sin considerar que la opinión general del país y las exigencias de los progresos institucionales y sociales han modificado mucho el valor de ciertas expresiones.

Debemos recordar en efecto que en el concepto de algunos círculos, la política queda reducida a un conjunto de declamaciones vacías, sin sentido alguno de realidad. Estos círculos viven agitados e impacientes, por realizar aspiraciones o ideales fuera de lugar y de tiempo.

Hay también otro concepto de la política que consiste en creer que es preciso el excluir en absoluto de la cosa pública al adversario, porque sólo puede ser buen ciudadano aquel que incondicionalmente se afilia a su causa. Después tenemos otro sentido de la política: el gobernante no hace buena política si, al día siguiente de su exaltación al poder, no persigue a su antecesor y despoja de sus empleos, de sus prerrogativas y derechos adquiridos a todos los servidores que encuentran en la administración pública.

Con arreglo a estos criterios no hay duda alguna de que los cargos dirigidos al Presidente de la República tienen apariencia de justificación, porque en ninguno de ellos he basado mis procedimientos de gobierno.

La política, según la entiendo, debe ser expresión de principios y fines constitucionales y considerarse en primer término como un medio dirigente en consonancia con las exigencias y circunstancias de cada época.

Nuestra actualidad es de paz, de trabajo, de organización y administración, de intereses económicos, de progreso material, de grandes obras públicas. Estas son las exigencias primordiales de la actualidad, como lo fueron secundarias en otras épocas, en que la urgencia consistía en constituir el gobierno, organizar su mecanismo, ensayar su funcionamiento, afianzar la libertad y las instituciones, luchar por ellas, imponer respeto por el libre ejercicio de los derechos cívicos, descentranar el gobierno personal y sustituirlo por el gobierno de la ley, cimentar la paz y el orden;—cincuenta años de agitación y de combate, pero al fin de enseñanza fructífera y saludable!

De ahí que esa política haya dejado de ser el campo permanente de acción de la masa social, no contrayéndose a ella sino lo indispensable para el ejercicio de los derechos cívicos, en las épocas precisas.

Aplicar principios elevados a la dirección y solución

de los negocios públicos dentro de las instituciones: fijar todas las energías y la mayor suma de labor al estudio de los problemas de la Administración pública, poniendo a su servicio todos los elementos del poder: pensar en constituir la unidad territorial por medio de comunicaciones telegráficas y ferroviarias que aporvechen al comercio y las industrias; realizar la obra del puerto de Montevideo, que entraña grandes horizontes de prosperidad nacional; realizar la fundación de una gran institución de crédito que fomenta y auxilia el trabajo productivo de nuestra campaña; sancionar estímulos y apoyos al desarrollo inteligente de todas las iniciativas y empresas útiles, demostrando que servimos al presente con una convicción clara de lo que guarda el porvenir: mantener cada día más vivo el sentimiento de la paz; predicar con palabras y con hechos la conciliación; acenar los respetos por la libertad electoral; leñahí lo que el Gobierno entiende en el presente por buena y sana política, la que entiende que el país reclama para su engrandecimiento, y la única política que la Constitución permite al gobernante que sabe acatarla.

Tal es el criterio con el cual mi gobierno ha encausado su acción en el terreno de la política, y no tiene responsabilidades en el futuro dentro de esta fórmula; sino que abriga la convicción de que ella responde a las necesidades de la época presente y que el sentido práctico y juicioso del país ha de aplaudirla y estimularla.

El mismo error de apreciación de lo que constituye la política lleva a ciertos grupos de oposición a atribuir al Gobierno en materia electoral cometidos que están fuera de sus facultades, y que, por no cumplirlos, dan origen a reproches.

No se piensa en que los progresos que en materia de instituciones son posibles en todo país democráticamente organizado, dependen mucho de la acción directa de los gobernantes que de la actividad inteligentemente dirigida de los ciudadanos, a los cuales por el cumplimiento fiel y perseverante de sus deberes cívicos, corresponde demostrar la bondad o la imperfección de las disposiciones regulatorias de los actos políticos y de las relaciones funcionales del organismo del Estado. Se pretende hacer responsable al Gobierno de la inacción en que caen voluntariamente algunas fracciones políticas, que, aún insistiendo en permanecer ajenas de todo movimiento cívico, se quejan amargamente de no tener en la cosa pública toda la participación a que aspiran.

Pero el Gobierno no tiene facultades para coaccionar a los ciudadanos a que acudan a los Registros Cívicos a fin de quedar habilitados para la contienda electoral, ni depende de la acción gubernativa obligar a los partidos a desarrollar sus influencias en una forma o por un procedimiento con preferencia a los demás.

La parte que en este orden de cosas puede incumbir al gobierno queda reducida, o a ejercer el derecho de iniciativa que la Constitución de la República le acuerda en la formación de las leyes; o a dar fidel y escrupuloso cumplimiento a las leyes en vigencia.

Pues bien: tengo la satisfacción de poder dejar constado que mi Gobierno ha ejercido su acción en uno y otro sentido. Ya en el Mensaje que en idéntica ocasión tuve el año pasado el honor de dirigir a Vuestra Honorabilidad se me ofreció la oportunidad para recordar que estaba pendiente de resolución legislativa un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo y tendiente a dar satisfacción a los que desean ver eliminados de las Juntas Electorales a los dos funcionarios de carácter administrativo, a quienes la Ley vigente confiere el derecho de formar parte integrante de aquellos cuerpos políticos.

No corresponde al Gobierno indagar qué razones indujeron al Cuerpo Legislativo a no considerar de inmediata urgencia esta discusión; sólo V. H. puede apreciar en su justo alcance el motivo por que, no sólo el proyecto del Poder Ejecutivo, sino también otros proyectos sobre el mismo asunto, emanados del seno de una y otra rama de esta Honorable Asamblea, hayan quedado aplazados para mejor oportunidad.

Del mismo modo que mi Gobierno ha hecho uso del derecho de iniciativa para modificar algunas de las disposiciones en materia electoral, ha puesto y está decidido a poner todo su empeño para que las leyes vigentes sean escrupulosamente cumplidas y queden aseguradas la pureza y sinceridad de las operaciones y procedimientos relativos al acto del sufragio.

Durante el año legislativo recién terminado, los ciudadanos no han tenido ocasión de hacer uso de sus prerrogativas, por no haber sido época de elecciones, ni generales ni parciales.

La única operación que les correspondía, era la inscripción legal en los Registros Cívicos. El período de inscripción se ha abierto y clausurado el año pasado en toda la República con la mayor regularidad, para volver a abrirse dentro de breves días con arreglo a las prescripciones de la ley.

El nuevo período electoral que en su establecimiento, está dedicado a la renovación casi integral de los Poderes

Públicos durará a los próximos comicios una importante especial, tanto por la extensión que abarca cuanto por la consiguiente agitación cívica que va a producirse en el seno de los partidos.

En armonía con su programa de política elevada, mi Gobierno sólo mantendrá a la altura de sus deberes de estricta legalidad y paciencia, como sostenedor celoso de todos los derechos cívicos, haciendo que se respete y que se cumpla en su expresión más amplia la libertad electoral, para que de ese modo la agitación sana pueda ejercer su influencia y sus derechos, haga sentir las inspiraciones del patriotismo y lleve a soluciones que concilien mejor las conveniencias públicas, y sea una garantía para el porvenir.

Suponer que atribuir al Poder Ejecutivo, un defecto a los métodos contrarios a estos principios es tan aporvechado como arbitrario y será preciso desmentar al comicio que ha hecho en nuestra sociedad la educación política, el interés solidario que inspira a todas las clases del país el cumplimiento de las instituciones, y por otra parte los profundos instintos y abstracciones que impulsan las masas de derechos populares—votantes y no votantes—que a nadie más lastiman que a la autoridad pública—para suponer que pueda entrar como programa de gobierno el propósito de obstaculizar o detener la lucha en los comicios, ya sea por intervenciones coercitivas o bien por manejos fraudulentos.

Por el contrario, el Gobierno aspira a que los principios de la libertad electoral se traduzcan en realidades—y no es el quién va a fraguar el fraude y el engaño en los comicios. El fraude como el engaño han existido y existen siempre, no por acto deliberado del Gobierno ni de las Asambleas que inician y hacen las leyes, sino como manifestación propia de este género de luchas y como un defecto de nuestra propia legislación, que tal vez no fiscaliza, previene y castiga lo bastante esos delitos. Los países de más antigua constitución, que más hábitos institucionales han adquirido, y tanto más celosos se muestran de la integridad del sufragio, sufren de eso mal, contra el cual luchan constantemente a fin de extinguirlo, considerando que sus efectos perjudican igualmente a todos los partidos.

Tal es mi convicción al respecto, que el año pasado al hacer referencia a este orden de ideas, tuve el honor de expresarles que, para que en las luchas del sufragio su acción se renueve y sea fecundo su resultado a la sociedad, es necesario que el éxito del partido triunfador en los comicios sea la emulación más grande para sus adversarios.

Nuestro mayor interés debe, pues, consistir en estimular a los partidos para la época de la lucha electoral, y afrontar todas aquellas reformas convenientes al mayor cumplimiento de la libertad electoral, y considero que a la altura en que estamos del proceso cívico, sería de impresión muy favorable para el país dar mayor seriedad, si es posible, a las disposiciones penales de nuestra legislación contra el fraude, y facilitar a los partidos el modo de fiscalizar más rigurosamente los actos electorales, a fin de evidenciar mejor las irregularidades que se cometen y promover más eficazmente su castigo.

Quizás no debiese de ser provechoso a todas las fracciones políticas que se dictasen a demás disposiciones tendientes a estimular la actividad de los ciudadanos, declarando un deber ineludible la inscripción en los Registros Cívicos, bajo la sanción penal de inhabilitación para todos los cargos públicos que exigen el ejercicio activo de la ciudadanía.

Por otra parte, y a pesar de las deficiencias de que adolezca nuestro régimen electoral y de la falta de disciplina cívica de algunos de nuestros partidos, debemos esperar que el resultado de los comicios de fin de año sea saludable al bien público, y que la Asamblea que ha de renovarse sea, a la vez que la expresión más sincera de la voluntad nacional, acto de acierto y de discreto civismo, para que en ella tengan representación genuina y merecida todos los partidos y círculos en que se divide la opinión, y podamos con ello demostrar ante propios y extraños que comprendemos la obra del presente, que es de paz, de libertad y de concordia, y que sabemos servir con tanto mayor patriotismo, cuanto más anhela la perpetuidad de todos los nobles propósitos que nos impulsan al perfeccionamiento de nuestras instituciones y a conquistar todos los nuevos elementos de orden y prosperidad que puedan redimir en bien de la patria.

El movimiento de favorable reacción económica principiado en 1894 ha continuado durante el año que acaba de concluir, y, de los documentos públicos que las Oficinas del Estado y la prensa han publicado, resulta detallado en todas sus partes el incremento de la actividad y de la riqueza del país.

El aumento del comercio de importación y exportación de 1894 sobre 1893 fué enorme, el de 1895 puede decirse que fué importante también, puesto que el total superó la cifra de 57 millones de pesos; pero hay que tener presente que no puede esperarse razonablemente que aumentos muy fuertes se produzcan cada año de una

manera regular. Lo esencial es que el fenómeno de reacción sea acentuado y constante, y en este sentido la marcha prospera y ascendente del estado financiero del país no puede ser desconocida ni objetada por nadie. Vamos adelante y rápidamente. Todos los movimientos que se traducen en cifras positivas de una manera irrefutable el progreso material de todas las actividades nacionales.

Han aumentado los consumos y la actividad industrial y mercantil, como lo prueban las cifras relativas al tonelaje del transporte terrestre y del transporte marítimo y las rentas de aduana y de impuestos directos.

El saldo debido a entrada y salida de metales avaluados que en 1894 fué de \$ 3.797.815 ascendió en 1895 a \$ 5.258.727; lo que durante los dos últimos años arroja un total de 9.056.542 en favor del país.

El excedente que el aporte de las rentas tributarias para el servicio de la Deuda Consolidada y garantías de Ferrocarriles dejó en 1894 para ser aplicado a la amortización fué de \$ 573.400, con lo que se extinguirá más de un millón de títulos de deuda; en 1895 el mismo excedente subió a \$ 761.400, lo que ha permitido amortizar este año como otro millón seiscientos mil pesos, o sea en los dos años más de dos millones seiscientos mil pesos, en cuya cantidad queda disminuido el monto total de la Deuda Pública.

Son hechos éstos que revelan de una manera indiscutible el aumento de la actividad nacional y el vigor de la fuerza productora de nuestra población.

Estos progresos habrían sido más sensibles aún si el país en lugar de haber sido abandonado al solo recurso del trabajo material, hubiese encontrado en la expansión y facilidades del crédito el auxilio necesario para que la industria tome mayor vuelo y encuentren útiles aplicaciones las varias iniciativas individuales.

Al objeto de responder a esta necesidad vivamente sentida por todo el país productor, que venosamente la mejor parte de sus utilidades por una usura onerosísima, el Gobierno se presentó un proyecto de ley, pidiendo la autorización de V. H. para contratar un empréstito cuyo producto sería destinado a la fundación de una poderosa institución de crédito, dirigida a satisfacer las necesidades del productor, y dar expansión a la actividad industrial de nuestros centros rurales.

La opinión general del país ha sido favorable a este proyecto, cuya resolución definitiva aún depende del voto de una de las ramas de esta Honorable Asamblea y el Gobierno tiene fundadas esperanzas de llegar al resultado más satisfactorio.

Al amparo de la paz, con el auxilio poderoso de una institución bancaria, que tonifique y regule la situación del crédito interno, libertándolo de toda influencia anormal que puede dominarlo; con la realización de obras públicas de altísima importancia, será doble esperar que vengán espontáneamente al país los brazos que el desarrollo de nuestras industrias y la ejecución de grandes trabajos públicos van a reclamar; se valorizará la propiedad territorial, aumentarán los consumos, y el movimiento comercial se acentuará cada día más y, seguirá con toda confianza la marcha próspera que ya señalan las cifras ascendentes de las operaciones de importación y exportación.

Mientras tanto, cabemos la satisfacción de comunicarnos que la situación del Erario tiende a regularizarse cada día más; el pago de presupuestos se efectúa normalmente, gracias al crédito y al favor siempre crecientes que los Certificados de Tesorería han encontrado y que les ha permitido conseguir elevadas cotizaciones sin que haya sido necesario afectarlos garantías especiales de ningún género, a no ser la garantía moral ofrecida por la corrección y lealtad de procederes del Gobierno.

Han sido atendidos todos los servicios reclamados por la administración pública, aun cuando algunos de ellos hayan exigido gastos considerables, pero incluíbles por su urgencia o por su naturaleza; muchos de los cuales, como los relativos a fiscalización de Aduanas y de impuestos, se traducen en aumento de rentas, y otros como la adquisición de propiedades representan economía de arrendamientos.

El hecho de haberse tenido que imputar estos gastos a un rubro que la exageración opositora trata siempre de desconectar, como el de Eventuales, no puede honestamente interpretarse como incorrecta inversión de dineros públicos, desde que son gastos que responden a exigencias de la vida administrativa de una Nación que, así como va desenvolviendo asombrosamente sus fuerzas vivas, necesita y reclama también cada día nuevas e imprevisibles erogaciones, que, desatendidas, se traducen en pérdidas muy sensibles para el Erario o dan lugar a reclamaciones que más tarde debe pagar, centuplicadas, la Nación.

La actual administración, a pesar de las nuevas obligaciones que leyes sucesivas han venido imponiendo al Erario, se ha visto obligada a actuar dentro de los límites decretados por la ley de Presupuesto sancionada para el ejercicio de 1893-94, anterior al presente período constitucional, y prorrogada por cada uno de los dos últimos ejercicios económicos.

La ley de Presupuesto en todo país bien organizado es para la administración la ley fundamental, dentro de la cual se encuadran y de la cual se derivan todos los servicios públicos.

Por contadas que puedan ser las modificaciones aconsejadas por las exigencias anuales del organismo administrativo, siempre habrá interés en que cada período económico sea regido por la ley especial que la Constitución le señala.

Esta sanción anual influye además poderosamente en el sentido de regularizar la marcha general de la administración, y dar mayor acierto y norma más segura a la acción gubernativa.

Es halagüeño esperar que Vuestra Honorabilidad consiga dar este año a la discusión de esta Ley toda la atención y estudio que ella merece, a fin de que resulte adaptada a las necesidades administrativas del país, y puedan ser arbitrados los recursos indispensables para que sean cubiertos sin perjuicios futuros los gastos de los servicios reclamados por la vida pública.

Sólo olvidando la historia de nuestros impuestos se ha podido hacer a mi Gobierno el cargo a todas luces injusto de haberlos aumentado para fines administrativos.

V. H. sabe que las obligaciones del Presupuesto siguen cubriéndose con los mismos recursos que fueron autorizados bajo la administración anterior, sin que se hayan acordado durante el actual período nuevas fuentes de ingresos.

El proyecto de los tributos que V. H. ha decretado últimamente, no está afectado a los servicios ordinarios de la Ley de Presupuesto.

La creación de estos tributos responde a razones superiores que V. H. conoce, como íntimamente relacionadas al decoro del país y a motivos de alta previsión para el futuro. No ha sido el resultado de un propósito forjado arbitrariamente, sino de una necesidad suprema, para satisfacer la cual, no habiendo posibilidad de hacer uso inmediato del crédito, ha sido indispensable apelar a un impuesto temporal o indirecto, que puede ser suprimido antes de los dos años fijados para su percepción, si dentro de este tiempo se reconocen convenientes y sin peligro poder su supresión.

Abrijo la confianza de que el país reflexivo estima aquellas provisiones en su justo valor y considera que los nuevos impuestos tienen su razón más amplia y justificada como creyó que no habría argumento alguno que pudiera poner a cubierto de responsabilidades a un gobierno que miraba imposible pasar delante de sí, hechos y sucesos, cuyo estudio y consecuencias deben interesarle.

En el Mensaje que tuve el honor de presentar a Vuestra Honorabilidad en la apertura del anterior período legislativo anuncié a la Honorable Asamblea General que los estudios para la preparación del proyecto definitivo del Puerto de Montevideo, en breve serían contratados con alguna de las responsables casas que habían presentado propuestas para ese fin. Efectivamente, analizadas las propuestas, la única que resultó ajustada en todo a los términos expresos de la ley de la materia, fué la de la casa de G. Luther de Braunschweig, Berlín y Viena.

Por Decreto de 22 de Abril p.d.a. fué aceptada la referida propuesta de la casa de Luther y se firmó el contrato con fecha 30 del mismo mes; un grupo técnico de ingenieros competentes dirigidos por el ingeniero H. Waldorp y por el profesor Arnold, provistos de los elementos necesarios para la realización de los trabajos, han llevado a cabo los estudios hidrográficos completos para formular un anteproyecto que ha sido aprobado con modificaciones por la Comisión Especial de Estudios integrada con tres ingenieros europeos de reconocida competencia.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en la ley de 14 de Julio de 1894 en lo relativo a la integración de la Comisión de Estudios, con uno ó dos ingenieros europeos de reconocida competencia en cuestiones hidrográficas y que hubieran realizado con éxito obras de puerto, el Poder Ejecutivo con el concurso de los Gobiernos amigos de Francia y de Alemania y el prestado por nuestras Legaciones en esos Estados, logró contratar para integrar la Comisión a los señores don Ernesto Kummer, don Adolfo Guérard y a don Juan G. Tolkmitz.

Con ese consenso competensísimo y con el muy estimable que ha prestado el elemento nacional que compone el Consejo del Departamento Nacional de Ingenieros y otros distinguidos elementos que colaboran en los complejos estudios que se hace necesario realizar para la ejecución del proyecto definitivo del puerto de Montevideo, se han reunido de una manera satisfactoria todos los datos, observaciones y estudios necesarios, en mérito de los cuales se preparará el proyecto para las obras.

Terminado el tiempo para el cual fué contratado el señor ingeniero Guérard, como miembro integrante de la Comisión Especial de Estudios del Puerto, el Poder Ejecutivo acaba de conseguir que este notable ingeniero continúe prestando sus servicios al país en el mismo carácter que antes invistió, hasta tanto sea terminada la preparación de todas las piezas que deben constituir el proyecto definitivo de esta gran obra.

El Poder Ejecutivo no ha ahorrado esfuerzo ni gestión alguna para cumplir fielmente la ley sobre estudios del puerto de Montevideo, y de los resultados alcanzados en tan importante cuestión espera daros cuenta muy en breve.

Varios trabajos de gran importancia local se han decretado durante el año transcurrido, entre los cuales cabe mencionar la canalización de la barra del Río Negro, y de los altos fondos de su curso hasta Mercedes, para abrir a la navegación interna esta caudalosa arteria fluvial; la canalización del arroyo de las Vacas, del arroyo del Rosario, del San Juan y del San Salvador; la construcción de un puente y una calzada en el Bañado de la Caballada; las mejoras y trabajos a efectuarse en el Puerto de la Colonia; los estudios necesarios para proyectar obras de mejoramiento en el puerto de Maldonado y en el de la Coronilla; y últimamente con el concurso de V. H. las obras para canalizar el brazo oriental del Uruguay en el paso del Ahumado.

Para la realización de estos trabajos, el Gobierno ha encontrado la más patriótica cooperación por parte de las poblaciones, que espontáneamente han ofrecido su concurso moral y material, dando prueba así de la perfecta inteligencia y unidad de propósitos que reina entre el Pueblo y el Gobierno.

El Poder Ejecutivo tiene el mayor empeño en verificar todos los estudios que puedan contribuir a facilitar la navegación de los ríos y arroyos del interior de la República, así como las mejores condiciones de abrigo de nuestros puertos, a fin de preparar el camino a mayores progresos ulteriores.

La tan debatida cuestión de los Ferrocarriles del Oeste ha sido objeto de atención de parte del Poder Ejecutivo, que, afrontando el juicio contencioso administrativo iniciado por los primitivos concesionarios contra la Compañía Uruguay Limited, creyó de su deber dictar la resolución que conoce V. H., enviando luego al Tribunal Superior de Justicia, de conformidad con aquella resolución, dicho asunto, para su fallo definitivo.

Penetrado el Poder Ejecutivo de la necesidad de proceder al arreglo de la propiedad territorial bajo la doble faz de la medición exacta del territorio y del Registro del título de propiedad que la garantiza, dictó la resolución de fecha 2 de Octubre último, para llevar a efecto la ejecución del Catastro geográfico parcelario de la República. En breve el Poder Ejecutivo someterá a vuestro estudio y sanción la ley orgánica para la formación del Catastro en condiciones de economía tales, que los gastos que demande en un principio esta operación sean reproductivos bajo distintas formas y sean reintegrados con creces al Estado por razón del aumento de la renta de Contribución Inmobiliaria. Este trabajo una vez concluido, traerá como resultado la valorización del suelo por la seguridad del título que consagra la pro-

riedad; la base para la distribución del impuesto directivo fomento de la inmigración, colonización y agricultura; el dato indispensable para el arreglo de la Hacienda pública; la medición parcelaria del territorio; elementos para muchos proyectos sobre obras públicas; el registro y la titulación sencilla de las tierras de propiedad privada, facilitando las transmisiones de dominio y la fácil percepción de los impuestos.

La creación del Instituto Experimental de Higiene señala otro notable progreso en nuestro organismo administrativo, por la facilidad y seguridad con que en adelante podrán resolverse científicamente todas las cuestiones relacionadas con la salud pública.

En cuanto a la Instrucción Pública, son realmente alentadores los datos estadísticos correspondientes al año anterior, que demuestran de un modo evidente el movimiento de progreso obtenido con relación a 1894.

Aumentado el número de escuelas públicas, en cuanto lo ha permitido la situación del Erario, ha crecido también, correlativamente, el número de alumnos, mejorándose las condiciones de la enseñanza por la selección que es dado efectuar, por el concurso de nuestros nacionales formados en nuestros Internatos Normales y Escuelas de Aplicación.

Los esfuerzos realizados para adquirir edificios escolares, han dado también un resultado halagüeño, llegando su número a 124, sin contar los proyectados para el año actual.

Demuestran estos datos que esta importante rama de la Administración Pública cada vez se cimienta sobre bases más sólidas en nuestro país, que en cuanto a ella se refiere ocupa uno de los primeros puestos entre las naciones más cultas.

Los datos correspondientes a escuelas y alumnos en 1895, son:

Escuelas públicas	521
privadas	348
Total	869
Alumnos de las Escuelas públicas	48.450
privadas	21.110
Total	69.560
Edificios de propiedad escolar	124

Dando cumplimiento a la Dirección General a lo establecido en el decreto del Poder Ejecutivo, de fecha 5 de Diciembre de 1894, trabajó con actividad construyendo de su seno una Comisión encargada de la formación del Código Escolar y otra para la reforma de los programas. A pesar de la importancia de esos trabajos, antes concluidos los han dado ya por terminados, —pasándolos a estudio de la Dirección General que trata de expedirse con toda la brevedad posible.

En el Telégrafo Nacional se han realizado progresos importantes.

Acaba de inaugurarse la línea directa entre la Capital de la República y Fray Bentos pasando por Las Piedras, Canelones, Santa Lucía, San José, Nueva Helvecia, Rosario, Colonia, Carmelo, Nueva Palmira, Dolores, Mercedes y otros puntos de menor importancia que se encuentran en el trayecto.

La extensión de esta línea es de 432 kilómetros, con 864 kilómetros de conductor, en cuyo trayecto se han construido 217 kilómetros de líneas nuevas, habiéndose reparado 169 kilómetros de líneas viejas sobre las cuales se colocaron dos nuevos conductores.

Además se ha colocado un nuevo conductor de bronce en la sección comprendida entre 25 de Agosto y el Durazno, en una extensión de 139 kilómetros, habiéndose completado esta obra con el establecimiento de un segundo hilo desde el Durazno hasta el "Paso de los Toros". De esta manera la línea nacional que corre por el centro de la República cuenta con un duplo conductor desde la capital hasta San Francisco. Actualmente la red telefónica de la República cuenta con: 939 kilómetros de línea con 1.208 kilómetros de conductor de hierro galvanizado y 402 kilómetros de líneas nuevas con 1.318 kilómetros de bronce silicio.

Se han construido 840 kilómetros de líneas telefónicas con 2.001 kilómetros de conductor en los departamentos de San José, Treinta y Tres, Cerro Largo, Rivera y Tacuarembó. Se continúa la construcción para completar las redes en los Departamentos de Tacuarembó, Rivera y Minas y así que llegue el material pedido a Europa podrán abordarse los trabajos en las líneas de Colonia, Soriano y Río Negro.

Debido al concurso popular en la realización de estas obras lo invertido en ellas por la Nación apenas ha alcanzado a la suma de \$ 31.000.

Hemos mantenido siempre vivo el empeño de conservar nuestras relaciones francas y cordiales con los países amigos, sobre la base de los principios que rigen estas relaciones y las de recíproca conveniencia.

Todas las cuestiones que hemos sido llamados a tratar en el orden internacional han revestido siempre ese carácter.

Hemos sostenido los derechos de la República y atendido todas las gestiones que se han promovido cerca de este gobierno con levantado espíritu de equidad, presidiendo nuestros actos la rectitud, la lealtad y la más completa buena fe, lo que nos ha granjeado el respeto y la consideración de las naciones amigas.

Me es en extremo satisfactorio participaros que la pacificación del Estado vecino de Río Grande del Sur, —que hemos aplaudido y anhelado sinceramente, porque ese hecho hacía cesar no sólo el derramamiento de sangre entre hermanos, y los inmensos perjuicios que el estado de guerra irrogaba al comercio y a las industrias de ambos países, sino también las fuertes erogaciones que imponía a nuestro erario la movilización de tropas y su sostenimiento en los puntos necesarios para mantener como se mantuvo durante la lucha, la más estricta neutralidad, —la venida felizmente a evitar que se reproduzcan los atentados de todo género perpetrados en la frontera por fuerzas dependientes de aquel Estado. De esos hechos reclamó en oportunidad el Gobierno Oriental, habiéndose obligado el del Brasil a hacer cumplida justicia castigando severamente a los culpables, según el compromiso contraído en el Protocolo de 15 de Febrero de 1894.

Nuestra Legación en el Brasil gestiona activamente los negocios que constituyen el primordial objeto de la mi-

sión especial confiada al doctor Carlos de Castro, y se relacionan con la navegación de la Laguna Merín y Río Yaguarón, la deuda de prestaciones y el Acuerdo Comercial.

Dada la importancia y trascendencia de esos asuntos y el positivo interés que ellos entrañan para ambos países, es de esperar que tengan una breve y satisfactoria solución, de conformidad con la justicia y el derecho internacional.

El Gobierno ha querido denunciar todos los Tratados de Comercio, a medida que vayan venciendo el término de su duración. Esta medida lo colocará en situación de poder estudiar con detenimiento las cláusulas de los nuevos convenios a celebrarse sobre esa materia, y que deben tener por base una verdadera reciprocidad de intereses y de tratamiento.

Interesado el Poder Ejecutivo en que las cuestiones que debaten los Gobiernos Sud-Americanos más vinculados a la República por su vecindad y sus relaciones políticas y comerciales, tengan una solución feliz, y obediendo a un sentimiento de verdadera confraternidad americana, no ha dejado de ejercitar, dentro de los límites establecidos por el derecho de gentes, con la cordura y prudencia requeridas, y en mérito de aquellas consideraciones, —sus buenos oficios con tan elevados propósitos.

Al efecto, nuestros representantes en las Repúblicas Argentina y Chilena, siempre que se ha presentado la oportunidad de hacerlo, han manifestado esos deseos ofrecido sus oficios en tal sentido. Esa conducta de nuestra parte ha sido debidamente apreciada por los Gobiernos respectivos.

Reina la más perfecta armonía entre la Iglesia y el Estado.

Ambas Potestades ejercen libremente sus funciones dentro de su respectiva esfera de acción, conservando el Estado íntegros todos los derechos que le acuerdan la Constitución y leyes de la República.

Está pendiente de vuestra soberana sanción un proyecto de Ley promoviendo al Arzobispado la silla episcopal de Montevideo.

El decoro y la dignidad de la Iglesia Nacional reclaman de inmediato esa promoción, y el Poder Ejecutivo se permite encarecer a V. H. la urgencia en el despacho de ese asunto.

En el ramo de guerra y marina la acción del gobierno se ha hecho sentir también como en los demás ramos de la administración pública.

Aun cuando por la situación de paz interior y exterior del país, no haya habido necesidad de operar grandes innovaciones en la organización de nuestras fuerzas militares, e incluso, sin embargo, la satisfacción de combates que se han verificado mejoras administrativas al objeto de hacer cada día más eficaz la disciplina; se ha procurado mejorar las condiciones de nuestra Academia Militar, para que sea el centro de preparación científica de nuestro Ejército; se ha transformado y aumentado nuestro armamento de infantería y artillería, poniéndolo a la altura de las exigencias militares de los tiempos presentes; y, como consecuencia de este progreso, se ha introducido notables reformas en la táctica general de la confección de adoptándose procedimientos más modernos y perfectos.

Se han realizado muchas mejoras materiales, haciendo más higiénicos los cuarteles en la capital y preparando la construcción de otros en la frontera; se han adquirido terrenos para varios servicios de artillería y caballería, y otras obras de importancia relativa cuyos detalles y justificativos encontraréis oportunamente en la Memoria del ramo.

Señores Señadores—Señores Diputados:

Quedaís impuestos por los lineamientos generales que acabo de exponer de lo ocurrido durante el año anterior y que encontraréis detalladamente tratado en las Memorias respectivas de los Ministerios, con lo cual queda satisfecho el doble deber de llevar a vuestro conocimiento y deliberación todos los actos públicos, de modo que podáis estar en posesión de los datos necesarios para apoyar e ilustrar vuestras leyes y resoluciones y proceder en todos casos con acierto y provecho.

Os he expuesto igualmente las ideas y los principios de política que constituyen la práctica de mi Gobierno, y que interpreto como los más saludables para el progreso y bienestar de los intereses conservadores que constituyen la riqueza, el trabajo productivo, el alzamiento de las instituciones, de la paz y del orden, de cuyo conjunto resulta la solidaridad común que realiza el carácter y da a la nacionalidad el vigor y el prestigio de los pueblos empeñosos y perseverantes en su engrandecimiento.

Me cabe la satisfacción de declarar que habéis compartido estos propósitos y prestado a mi Gobierno en todos los momentos el concurso siempre acertado de vuestra prudencia y de vuestras luces, el que espero como hasta ahora en lo sucesivo, para que nos sea dado, a la vez que compartimos tan grandes responsabilidades, participar de la acción justiciera y tranquila que nos depare el fallo público.

En la práctica del Gobierno la tarea es siempre ardua y difícil, y en el presente no lo es poca, y nuestro primer cuidado debe consistir en apreciar con espíritu tranquilo los sucesos, no desoir una sola manifestación de hechos o de ideas de donde quiera que venga, que pueda ilustrar nuestro juicio o prevenirnos del error; penetremos cada vez más de la convicción de que el mejor gobierno es el que mejor concilie los intereses de la autoridad con los intereses populares, y estimular con nuestros actos el sentimiento y el patriotismo de todos los buenos ciudadanos a fin de que todos nos presten su concurso, y la tarea del gobierno sea así tanto más provechosa al bien del país.

Señores Señadores—Señores Diputados:

Hay expectativas en el país y ojetos muy interesantes que reclaman la acción de vuestras leyes, lo que hace esperar que las sesiones que vais a inaugurar serán sin duda laboriosas y fecundas.

Reproduzco con sinceridad y con firmeza los votos solemnes que tengo ya pronunciados en este augusto recinto y pido a Dios para vuestros actos como para los míos su auxilio todopoderoso.

Señores Señadores—Señores Diputados:

Queda abierto el presente período de vuestras sesiones legislativas.

JUAN IRIARTE EORDA.